

# Los costos de convivir con alta inflación

■  
*Las últimas medidas adoptadas por el gobierno reflejan falta de consistencia y visión de largo plazo en el diseño de la política económica.*

■  
*La suspensión de exportaciones de carne acentuará en el mediano plazo las dificultades para abastecer al mercado interno.*

■  
*La elección oficial de convivir con alta inflación conlleva el costo de una permanente tensión por la distribución del ingreso.*

La economía argentina ha pasado un verano sin mayores sobresaltos desde una perspectiva macroeconómica. Los indicadores de producción y consumo se mantienen en niveles elevados si se los compara con respecto al mismo período de años anteriores, y por el momento, no se han visualizado signos de desaceleración en el ritmo de actividad. El cumplimiento del programa financiero del estado, una cuestión central al analizar las perspectivas económicas hasta no hace más de un año, no presenta mayores complicaciones tras la renegociación de la deuda y la cancelación de deuda con el Fondo Monetario Internacional. En este marco, la principal preocupación del Gobierno desde la asunción de nuevas autoridades en el Ministerio de Economía, se ha centrado en contener la tasa de inflación a través de acuerdos de precios. Desde la perspectiva oficial, la evaluación del desempeño macroeconómico de cada mes parece reducirse a esperar el resultado del índice de costo de vida estimado regularmente por INDEC. Así, tras un mes de febrero "exitoso" con una inflación del 0,4%, ubicada muy por debajo de la mayoría de los pronósticos, la estabilidad macroeconómica del país se vio amenazada por el fuerte incremento en el precio de un producto, la carne vacuna.

En los primeros días de marzo, el exceso de demanda provocó un fuerte incremento en el precio de la carne en el mercado de Liniers. Con un aumento por encima del 10% en los principales cortes, debido a la fuerte ponderación que estos productos en el índice se proyectaba en marzo una inflación muy por encima del 1%. Inmediatamente se anunció una suspensión de exportaciones de carne vacuna sin mayores detalles de cómo se instrumentaría la medida.

El objetivo que el gobierno persigue con esta medida es incrementar la oferta interna de carne y equilibrar un mercado que se caracterizó en los últimos meses por presentar una fuerte suba en el precio de la hacienda en pie, que acumula en lo que va del mes un 20%. A partir de su implementación se intenta frenar el impacto del aumento en el precio de la carne sobre el nivel de inflación. El incremento en el precio de la carne se produce por diversos factores. El primero de ellos es un aumento en la demanda interna a causa de la recomposición nominal de los salarios, sumado a que Argentina es un país donde mayores salarios se traducen en una mayor demanda de carne como consecuencia de los hábitos de consumo de la población. También se registra un incremento en la demanda externa, y a esto se suma la escasez de oferta como consecuencia de la tasa de extracción registrada en los últimos años, las sequías de los años 2003 y 2005 y la imposición de un peso mínimo para faena que, en el mejor de los casos, solamente ha postergado la oferta. Las acciones del gobierno intentan atenuar el componente externo de la demanda bajando el nivel agregado de la misma.

Como consecuencia de esta medida, en el corto plazo, aproximadamente unas 600 mil toneladas de carne vacuna que anteriormente se destinaban al sector externo se volcarán al mercado interno, de acuerdo con las estimaciones oficiales. Esto determinaría una suba del

orden del 25% en la oferta de carne respecto a lo consumido a nivel país el último año. Como aún no está claro el alcance final de la prohibición, es decir qué ocurre por ejemplo con los contratos ya firmados o con los cortes de alto valor agregado, la estimación del 25% quedaría condicionada a la cifra de reducción estimada. El interrogante, de ahora en más, se vincula con el nuevo equilibrio en el que se estabilizará el precio de la carne en el mercado doméstico, después de los bruscos cambios que se generarán en toda la cadena de la carne vacuna. No puede asegurarse cuál será el impacto efectivo sobre el precio al consumidor y, por ende, sobre el nivel de inflación.

Uno de los eslabones más afectado, en principio, sería el de los frigoríficos exportadores. En primer lugar, las empresas tienen compromisos externos asumidos que no podrán cumplir como consecuencia de la prohibición, lo cual deteriora su imagen comercial y su trayectoria. La inserción en el mercado internacional de carne no es una tarea menor y las empresas llevan invertido en ello gran cantidad de recursos económicos y tiempo. Retomar las posiciones una vez que se levante la prohibición puede ser complicado.

En segundo término, como consecuencia de la medida las empresas exportadoras deberán reorientar sus ventas hacia el mercado interno. La posibilidad que éstos tengan de hacerlo dependerá de diversos factores, entre ellos, el precio del novillo en el mercado una vez concluidos los ajustes, el precio de la carne al consumidor que convalide la población después de este aumento en la oferta, y de la capacidad que tengan los exportadores de mantenerse operativos sobre su punto de equilibrio frente a los nuevos márgenes de rentabilidad. Esta situación pone de relieve un tercer aspecto que es el impacto sobre el empleo, que involucra aproximadamente a 10 mil personas.

Los sectores primario y de comercialización tendrán efectos diversos, producto de la suspensión en los envíos al exterior. En el primer sector se podría iniciar un ciclo de liquidación, consecuencia directa de los desincentivos a la producción ganadera generados por la medida analizada. Como consecuencia de ello cabe esperar una disminución en la cantidad de hectáreas ganaderas y un aumento en la cantidad de hectáreas agrícolas, dependiendo de la aptitud de las mismas.

El sector de comercialización podría aumentar su actividad en el corto plazo, producto del proceso de liquidación, pero en el mediano plazo, si no se implementan medidas que incentiven la producción ganadera y pueda competir con la rentabilidad agrícola en las regiones fuera de la zona núcleo, difícilmente pueda mantener los niveles de comercialización en los que se desenvuelve actualmente.

Existen también otras implicancias de orden más general. La oferta de carne vacuna argentina se mantendrá en niveles bajos debido a los desincentivos a la producción ganadera que generan medidas de esta índole. Esto significa que Argentina pierde la oportunidad de mejorar su participación en el mercado internacional de carnes. Procurar el objetivo de corto plazo (mantener precio interno en determinado nivel) lleva a un deterioro en la evolución de largo plazo. Hay un efecto muy importante sobre "reglas de juego": compromisos asumidos (tanto de exportadores, como de productores que fueron orientando su explotación y sus inversiones para producir novillos de exportación). Esto tiene como consecuencia un aumento del "riesgo" de invertir en ganadería y una baja de la inversión. Llama la atención la "miopía" de la decisión: apunta al cortísimo plazo pero no hay ninguna previsión para el futuro. ¿Por qué razones las causas que motivaron la medida actual desaparecerán dentro de 180 días que duraría la suspensión?

Adicionalmente, la evolución del índice de inflación se ha visto influenciada por numerosos productos, es decir que no responde exclusivamente a incrementos en el precio de la carne vacuna. Los sucesivos intentos del gobierno por mantener acuerdos de precios con diferentes

sectores avalan este hecho. Aún cuando se lograra contener el precio de la carne de algún modo, al menos transitoriamente ¿Cuál será el próximo sector afectado por alguna medida como esta? Medidas de este tipo, con efectos redistributivos entre distintos sectores de la economía, incentivan a los diferentes grupos de interés a realizar acciones para obtener beneficios propios. La medida implica una fuerte redistribución del ingreso que perjudica al interior del país (incluso a Bahía Blanca, aunque la dirigencia política no lo advierta o lo manifieste) y beneficia a la ciudad de Buenos Aires y su área de influencia. Es cierto que la redistribución favorece a personas de ingresos bajos, pero también a los consumidores de carne de alta calidad que son sectores de ingresos elevados (incluso superiores a la media de los ganaderos perjudicados por la medida). Nótese que el mayor aumento en los precios de la hacienda en la semana previa a la medida se produjo en los animales de consumo liviano que abastecen el “consumo de lujo” de la ciudad de Buenos Aires.

Las contradicciones en las políticas oficiales merecen un comentario aparte. Tal es el caso de la política comercial de Argentina y su estrategia en las negociaciones internacionales: Argentina ha basado su posición en la crítica a los subsidios y otras trabas a las exportaciones, razón aducida para no negociar el ingreso al ALCA ¿Cómo puede conciliarse ese argumento con la prohibición decretada? Además, cuando apareció el reciente foco de aftosa el gobierno ponderó su acción para aislarlo y para gestionar que los cierres de los mercados se circunscribieran a la región afectada. ¿Cómo se concilia esta política con la posterior prohibición? Por otra parte, el gobierno acaba de establecer la trazabilidad obligatoria de los terneros para 2007 respondiendo a los requerimientos de los mercados externos. Nuevamente, ¿cómo se compatibiliza esta obligación –que es costosa- con la suspensión de exportaciones?

Cabe hacer una consideración con respecto al concepto de inflación y al rol que juegan los precios en las elecciones de los consumidores. La tendencia ascendente del precio, por encima del índice general de inflación, revela un exceso de demanda sobre la oferta. El empeñamiento por contener el precio de un producto escaso, y que por lo tanto tiende a un ritmo de aumento mayor al del resto de los precios (aumenta su precio relativo), puede generar confusiones en la población. Aunque el precio de la carne genere aumentos importantes en el índice de inflación, representa un problema distinto. El consumo de un producto depende su precio relativo, es decir en comparación con el precio de otros bienes, en tanto que la inflación mide los cambios en el precio absoluto de todos los bienes, simplificando el cálculo a través de una canasta de consumo representativa. Si frente a un aumento en el precio de la carne vacuna el consumidor logra readecuar su consumo sustituyéndola por otros alimentos, habrá eludido la suba de la carne y no necesariamente deberá resignar el consumo de otros bienes.

El aumento del precio “relativo” de la carne refleja escasez del producto. Los intentos de establecer controles, además de resultar inefectivos agudizan el problema de la disponibilidad de oferta a largo plazo. Hubiera sido más efectivo no generar interferencias en el mercado de la carne, relativizar el impacto del precio de la carne vacuna sobre la inflación, explicando a la población que se trata de un ajuste de precios relativos que puede requerir modificar hábitos de consumo si no se quiere resignar calidad de vida a través de la reducción del gasto en otros bienes. El problema es decidir quién se hace cargo de transmitir la “mala noticia”. Por supuesto, conociendo los hábitos de consumo argentinos, la mayoría preferiría consumir más carne vacuna. Para ello, se debe producir más y aumentar los ingresos reales de la población.

## Los costos de convivir con alta inflación

Convivir con alta inflación, además de ser representar un alto riesgo, conlleva numerosos costos. Uno de ellos es la permanente tensión por la distribución del ingreso a través de distintos mecanismos, entre los que pueden citarse como ejemplo las negociaciones salariales.

La fuerte recomposición salarial de los últimos dos años en términos nominales se ha podido concretar por la drástica caída del salario real por devaluación. Pero fija una expectativa de progresos salariales que no es viable para los niveles actuales de productividad de la economía argentina. El gobierno sabe que no hay margen en próximas negociaciones salariales para incrementos que superen la tasa de inflación esperada, estimado entre el 12 y 15% anual. Partiendo de la premisa que el tipo de cambio nominal debe mantenerse elevado, la opción oficial es congelar los precios a cualquier costo, vía regulaciones y subsidios. Las medidas arriba comentadas sobre las exportaciones de carne representan una prueba cabal de que los efectos de largo plazo no intervienen en los cálculos de costo y beneficio del gobierno.

Por otra parte, la acumulación de desequilibrios lleva a adoptar medidas cada vez más costosas. Nuevamente la carne sirve como ejemplo. Frente a la posibilidad de cierre de plantas frigoríficas y ante el riesgo de manifestaciones públicas por parte de los empleados cesanteados – que son varios miles –, es posible que el gobierno opte por un subsidio para mantener los ingresos de los empleados afectados. Si se agregan otros costos directos como la pérdida de recaudación – sólo en retenciones, resignaría unos u\$s 250 millones –, se arriba a una cifra que permitiría financiar subsidios directos para la población de menores ingresos. Si se toma la decisión política de subsidiar el consumo de algún sector de la economía en particular (por ejemplo el sector de bajos ingresos), un subsidio “directo” es más eficiente que forzar una baja generalizada de precio del producto, porque en este último caso también significaría una transferencia hacia sectores de alto poder adquisitivo.

En esta oportunidad, el costo de contener la inflación consiste en acumular desequilibrios microeconómicos que reducen la tasa de inversión y en algunos casos, cabe advertir, pueden significar la gestación de futuras crisis. Es un costo elevado, más aún cuando no se sabe si es suficiente para satisfacer las expectativas de todos los que de alguna manera sostienen el actual andamiaje político. ■